



AMPARO EN REVISIÓN: 44/2019.
NÚMERO INTERNO: 293/2019.

RECURRENTES:

DIRECTORA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL NÚMERO 4, POR
CONDUCTO DE SU DELEGADO; JEFE DE LA
FÁBRICA DE CONFECCIÓN "A"; Y,
DIRECTOR GENERAL DE FÁBRICAS DE
VESTUARIO Y EQUIPO, TODOS DE LA
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

QUEJOSA:

MAGISTRADO PONENTE:

CARLOS ALFREDO SOTO MORALES.

SECRETARIA:

NORMA ALEJANDRA CISNEROS GUEVARA.

Resolución del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, correspondiente a la sesión de veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver los autos del amparo en revisión **44/2019**, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

RESULTANDO:

1

Trámite ante el Juzgado de Distrito.

En escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ***** ** ***** ***** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que enseguida se transcriben:

A. Señalo como autoridad ordenadora:

B. Señalo como autoridad ejecutora:

Director General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la
Secretaría de la Defensa Nacional...

De la Autoridad ordenadora la Directora del Centro de Desarrollo Infantil, como autoridad ordenadora le reclamo el correctivo disciplinario de fecha 23 de octubre del presente año mismo que carece de motivación porque simplemente se jactó en mencionar que se impuso el correctivo por "...HABLAR EN TONO DE VOZ ALTERADO A LA SUSCRITA CUANDO SE LE EXPLICABA EL PROCEDIMIENTO PARA NEGARSE A MINISTRARLE UN TRATAMIENTO MÉDICO INDICADO POR LA C. MAYOR MARGARITA APARICIO OSORIO, A SU DERECHOHABIENTE LA NIÑA * * * *.¹ INSCRITA EN EL GRUPO DE LACTANTES III DE ESTE CENTRO EDUCATIVO...", ya que no refiere cual fue la (sic) exactamente el modo alterado ...

De la autoridad ejecutora el Director General de Fábricas de Vestuario y Equipo en virtud de que dicha boleta de arresto fue impuesto sin otorgar garantía de audiencia misma que garantiza los nuevos formatos de órdenes de arresto en virtud de que en ningún momento me fue escuchado en la imposición máxima sin tomar en cuenta los antecedentes, por lo que considero que si bien es cierto la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos faculta a los Directores a graduar correctivos también lo es que para la imposición de dicho correctivo se debió otorgar a mi Cabo ***** **** la garantía de audiencia tal y como lo señalan los nuevos formatos de correctivos disciplinarios que ha emitido la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Asimismo, señaló que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 7.1.2 y 8.1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de

1 Con fundamento en el Protocolo de Actuación Para **Quiénes Imparten Justicia** en Casos que Afecten a Niñas y Adolescentes, Capítulo III relativo a las Reglas de Actuación Generales, punto 10, denominado Medidas para proteger la Intimidad y el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes, primer párrafo inciso a), elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, únicamente se insertarán sus iniciales al momento de hacer referencia a ella.



México, que por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la registró bajo el consecutivo 1331/2018; concedió la suspensión de plano del acto reclamado, para que las autoridades responsables garantizaran la integridad física de la parte quejosa y cesaran cualquier acto de incomunicación u hostigamiento, además de atender el interés superior de su menor hija, procurando que se le proporcionaran alimentos de lactancia las veces que fuera necesario. Asimismo, requirió a la promovente, para que precisara diversos puntos de la demanda de amparo.

Posteriormente, en auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el juzgador federal requirió nuevamente a la parte quejosa, para que aclarara si era su deseo señalar como acto reclamado el correctivo disciplinario de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, consistente en noventa y seis horas de arresto, impuesto por el Jefe de la Fábrica de Confección “A” y graduado por el Director General, ambos adscritos a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicha medida fue interpuesta por haber promovido la demanda de amparo y no haber agotado las instancias correspondientes en el fuero militar. Asimismo, otorgó de plano la suspensión de dicho acto reclamado.

Una vez desahogado el requerimiento antes referido, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda de amparo; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

Seguido el procedimiento de ley, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, celebró la audiencia constitucional, y, el treinta y uno siguiente emitió sentencia, en la que se resolvió:

11

10

terior dete
il número

e Fábricas

Nacional; a

bos por co
de la Se

ón, del cual

Administrat
de dos mil

Secretaría de
de la Ley d

nero 4 d
n tiempo

0 6	Fecha de presentación del recurso
7 8 e	Jueves 17 enero 2019. (Hoja 3 expediente que se actu

ipo; así
de la Se

0 6	Fecha de presentación del recurso
7 8 e	Viernes 18 de enero 2019. (Hojas 34 y del juicio amparo).

א



TERCERO.

Antecedentes relevantes.

Las constancias⁸ que destacan para resolver la presente instancia de control constitucional son las que se narran a continuación:

1. El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se le impuso a ***** un arresto de quince días, como correctivo disciplinario, por la falta consistente en: *“HABLAR EN TONO DE VOZ ALTERADO A LA SUSCRITA CUANDO SE LE EXPLICABA EL PROCEDIMIENTO PARA NEGARSE A MINISTRARLE UN TRATAMIENTO MÉDICO INDICADO POR LA C. MAYOR M.C. MARGARITA APARICIO OSORIO, A SU DERECHOHABIENTE LA NIÑA * . * . * . INSCRITA EN EL GRUPO DE LACTANTES III DE ESTE CENTRO EDUCATIVO”*⁹.

Por otra parte, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho se impuso un nuevo arresto a la quejosa, ahora por noventa y seis horas, al “no agotar las instancias correspondientes en el fuero de guerra, para que le fueran aclaradas sus dudas respecto al correctivo disciplinario que le fue impuesto por infringir la disciplina militar...”.

2. En contra de las medidas disciplinarias anteriores,
***** ** ***** ***** **** promovió juicio de amparo, de
la que conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, el que le asignó el
consecutivo 1331/2018.

3. Una vez agotadas todas las etapas procesales, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho se emitió sentencia, en la

⁸ Documentales a las cuales se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

⁹ Hoja 10 del juicio de amparo.

que se concedió el amparo, al estimar que no se respetó el derecho de audiencia previo a la emisión de los arrestos impugnados.

La sentencia precisada en el párrafo que antecede constituye el fallo recurrido en este medio de defensa.

CUARTO.

Estudio.

Por técnica jurídica, los agravios propuestos por la autoridad recurrente Director General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se estudiarán de manera diversa a la propuesta.

En el **segundo** agravio manifiesta que el juzgador de amparo omitió pronunciarse respecto del acto a ella reclamado, desestimando el contenido del oficio AMP-I-2451, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por el que rindió su informe justificado e incluso se hicieron valer causales de improcedencia.

Los anteriores argumentos son **infundados**.

Es cierto que mediante oficio AMP-I-2451, fechado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, la recurrente emitió su informe con justificación; sin embargo, el escrito fue presentado ante la oficina de correspondencia común hasta las diez horas con seis minutos del veintiséis de diciembre de esa anualidad y remitido al juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintisiete de ese mes y año a las nueve de la mañana según se advierte de los sellos fechadores que ostenta el escrito¹⁰.

¹⁰ Página 132 del juicio biinstancial.

110

asó por a
rme al a
gar la ga
ya qu
en vía d

eche de
 nposición
 erior par
 correctiv

titar en v
 iva del c
 ar, prev
 en que n
 udiencia.
 de los me
 solicitar

evia, deb
no sancio
elemento

órgano jurisdiccional sin necesidad de con su intervención previa autorización disciplinaria. El elemento de eficacia disciplinaria triba en la observancia de la ley.

no esté
rior a exp
caso, res

lo debió n
cífica c
de aprem
ón a los r



A fin de dar claridad al t3pico a dilucidar en el presente asunto, conviene referirse, en primer t3rmino, a la distinci3n entre actos privativos y actos de molestia y, despu3s, a la naturaleza del arresto militar, para entonces determinar si, como lo refieren las autoridades recurrentes, el arresto decretado en perjuicio de la quejosa se coloca en el supuesto de excepci3n de audiencia posterior a su imposici3n.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.”

El precepto constitucional transcrito establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los **actos privativos** son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva y no sólo provisional de un derecho del gobernado, siendo que la Constitución General los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal

Dichos actos se distinguen de los meros **actos de molestia** en que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del ciudadano, no producen los mismos efectos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los cuales, según lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, están autorizados siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde funde y motive la causa legal del procedimiento.

Ahora, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, si requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el artículo 14 constitucional, o bien, si es un acto de molestia y, entonces, es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el artículo 16 constitucional exige.

Para efectuar esa distinción deben advertirse los efectos que producen, esto es, si la privación es de un bien material o inmaterial, o bien, si generan una restricción provisional o preventiva con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos¹⁴.

Época: Novena Época Registro: 200080 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P/J. 40/96 Página: 5 de rubro y texto: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos

Con base en el marco jurídico antes expuesto, se analiza el arresto como correctivo disciplinario, previsto los artículos 24 Ter, 24, Quáter, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 33 Bis, fracciones I y II, 33 Ter, 33 Quáter, 33 Quinquies de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos¹⁵, así como los numerales 47, 48, 49, 50,

¹⁵ Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos:

CAPITULO III

Correctivos Disciplinarios

ARTÍCULO 24 Ter.- Correctivo disciplinario es la medida coercitiva que se impone a todo militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por haber infringido las leyes o reglamentos militares, siempre y cuando no constituyan un delito.

ARTÍCULO 24 Quáter.- Los correctivos disciplinarios se clasifican en:

I.- Amonestación:

II.- Arresto, y

III.- Cambio de unidad, dependencia, instalación o comisión en observación de su conducta, determinado por el Consejo de Honor.

$$[\dots]$$

ARTÍCULO 25.- El arresto es la reclusión que sufre un militar en el interior de las unidades, dependencias o instalaciones militares y puede ser impuesto con o sin perjuicio del servicio.

En el primer caso, sólo podrán desempeñarse aquellos servicios que no requieran salir del alojamiento, por estar el militar a disposición de su Comandante o Jefe de la Unidad, Dependencia o Instalación.

ARTÍCULO 26.- Si el que impone el correctivo no tiene bajo su mando directo la tropa a que pertenece el que comete la falta, ordenará el arresto y dará cuenta a la autoridad militar correspondiente, siendo ésta quien fijará la duración del castigo, teniendo en consideración la jerarquía de quien lo impuso, la falta cometida y los antecedentes del subalterno.

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

ARTÍCULO 28.- Toda orden de arresto deberá darse por escrito. En caso de que un militar se vea precisado a imponerlo por orden verbal, surtirá efectos de inmediato, pero dicha orden deberá ser ratificada por escrito dentro de las 24 horas siguientes, anotando el motivo y fundamento de la misma, así como la hora; en caso de que no se ratifique, la orden quedará sin efecto.

ARTÍCULO 29.- El que impida el cumplimiento de un arresto, el que permita que se quebrante, así como el que no lo cumpla, serán sancionados de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Justicia Militar.

ARTÍCULO 31.- El militar que ejerce Superioridad jerárquica o de cargo, podrá imponer correctivos disciplinarios.

Superioridad de cargo es la inherente a la comisión que desempeña un militar, por razón de sus funciones, y de la autoridad de que está investido.

ARTÍCULO 33.- Los arrestos se impondrán a:

II.- Los Oficiales, hasta por ocho días, y III.- La Tropa, hasta por quince días.

Los militares en situación de retiro cumplirán el arresto en la instalación militar más cercana a su domicilio.

ARTÍCULO 33 Bis.- Tienen facultad para graduar arrestos:

II.- En las tropas a su mando:

b) Los Directores Generales de las Armas y Servicios, y

En ausencia de los anteriores, la facultad recaerá en quien los suceda en el mando o cargo.

Quando a juízo del que deba graduar el correctivo, la gravedad de la falta merezca la imposición de un arresto superior al máximo que le sea permitido aplicar, dará cuenta a la autoridad facultada para que sea ella quien lo gradúe. El militar facultado para graduar arrestos, podrá dejarlos sin efecto o sustituirlos por amonestación.

ARTÍCULO 33 Quinquies.- El militar que esté cumpliendo un arresto y se haga acreedor a otro, empezará a cumplir este último desde el momento en que se le comunique.

¹⁶ **Reglamento General de Deberes Militares.**

“[...] CAPITULO III

Correctivos disciplinarios

La Superioridad tiene, entre otras características, la facultad de corregir, y por lo tanto, el que la ejerce, jerárquica o de cargo, tendrá derecho a imponer correctivos disciplinarios.

ARTÍCULO 48.- Se entiende por correctivos disciplinarios, las sanciones que se imponen a los militares por infracciones que no constituyan un delito.

ARTÍCULO 49.- Los correctivos disciplinarios son:

I.- AMONESTACION:

II.- ARRESTO, y

III.- CAMBIO DE CUERPO O DEPENDENCIA.

Queda estrictamente prohibida la represión, que por ser afrentosa y degradante, es contraria a la dignidad militar.

ARTÍCULO 50.- La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al inferior la omisión o defecto en el cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse, a fin de que no incurra en falta y se haga acreedor a un arresto. La amonestación puede hacerse de palabra o por escrito. En ambos casos, la harán de manera que ningún individuo de menor categoría a la del aludido se aperciba de ella, procurando observar en estos casos la discreción que les exige la disciplina.

El arresto es la reclusión que sufre un militar por un término de 24 horas a 15 días en su alojamiento, cuartel o en las guardias de prevención; entendiéndose por alojamiento la oficina o dependencia militar donde presten sus servicios lo interesados.

ARTÍCULO 51.- Tienen facultad para imponer arrestos a sus inferiores en jerarquía o cargo, en los límites fijados en el artículo 53: los generales, jefes, oficiales y clases.

ARTÍCULO 52.- Tienen facultad para graduar arrestos:

I.- El Secretario, Subsecretario y Oficial Mayor de Guerra y Marina.

II.- En las tropas a su mando:

a).- Los comandantes de Grandes Unidades, de Zona y de Guarnición.

b).- Los Jefes o directores de Departamentos, oficinas, establecimientos u otras dependencias.

c).- Los comandantes de Cuerpos de tropas, de armas, partidas y destacamentos.

ARTÍCULO 53.- Los arrestos a que se refieren los artículos anteriores, se impondrán: a los generales y jefes, hasta por 24 y 48 horas, respectivamente, en su alojamiento militar.

A los oficiales, hasta por 8 días en sus cuarteles, oficinas o dependencias.

A los individuos de tropa, hasta por 15 días en las guardias de prevención.

Los Generales, Jefes, Oficiales e individuos de tropas que no tengan destinación fija y se encuentren en disponibilidad, cumplirán los arrestos que se les impongan en cualquiera de los recintos militares antes señalados.

Estos arrestos pueden ser impuestos con o sin perjuicio del servicio.

En el primer caso, sólo podrán desempeñarse aquellos que no requieran salir del alojamiento, y en el segundo, saldrán únicamente en asuntos del servicio con autorización del Comandante o Jefe de la dependencia.

El Secretario, Subsecretario y Oficial Mayor, tendrán facultades para imponer y graduar arrestos a los generales, jefes, oficiales e individuos de tropa, hasta por 15 días.

ARTÍCULO 54.- Cuando el que imponga el arresto no esté facultado para graduarlo, de acuerdo con el artículo 52, dará la orden de arresto comunicándola al superior de quien dependa el arrestado o a la autoridad correspondiente, informándole de las causas que lo motivaron, para que lo gradúe.

ARTÍCULO 55.- Todo militar facultado para graduar arrestos tendrá muy en cuenta, al hacerlo, que sea proporcional a la falta cometida, a la jerarquía, a los antecedentes de los infractores y a las circunstancias.

Cuando a juicio del que deba graduar el castigo, la gravedad de la falta merezca la imposición de un arresto superior al máximo, que le sea permitido aplicar, dará cuenta a la autoridad capacitada para que sea ella quien lo gradúe.

ARTÍCULO 56.- Los arrestos en las Prisiones Militares, sólo se cumplirán mediante autorización concedida por los Comandantes de Zona o de Guarnición y siempre que se trate de resoluciones tomadas por los Consejos de Honor.

ARTÍCULO 57.- Con excepción de las clases, quienes podrán darlas verbalmente, toda orden de arresto deberá darse por escrito; en caso de que el que la da se vea obligado a comunicarla verbalmente, la ratificará por escrito a la mayor brevedad, anotando el motivo.

ARTÍCULO 58.- El que hubiere recibido orden de arresto, deberá comunicar al superior de quien dependa así como al que se la dio, haberse presentado a cumplirla, e igual formalidad observará al terminarla. Los generales, jefes y oficiales lo harán por escrito y la tropa de palabra.

ARTÍCULO 59.- El que impida el cumplimiento de un arresto, el que permita que se quebrante, así como el que no lo cumpla, deberá ser consignado de acuerdo con el Código de Justicia Militar.

ARTÍCULO 60.- No se impondrá ningún correctivo disciplinario a un militar durante el estado de ebriedad. El superior se limitará a evitar que cometa algún desorden o continúe escandalizando, haciéndolo detener, de ser posible por individuos de su misma jerarquía, o por la policía, para después significarle la gravedad de la falta e imponerle el castigo a que se haya hecho acreedor o consignarlo, en su caso.

ARTÍCULO 61.- Las amonestaciones no se harán figurar en los expedientes de los militares, pero sí los arrestos con anotación de las causas que los hayan motivado, su duración y lugares donde fueron cumplidos.

ARTÍCULO 62.- Las solicitudes de cambio de Cuerpo o Dependencia, sólo podrán hacerla los Consejos de Honor, por ser de su competencia.

ARTÍCULO 63.- Los superiores tratarán de hacerse querer de sus subalternos, y nunca establecerán la disciplina a base de temor.

Hay algo más noble que castigar, en la elevada misión que la Nación les ha encomendado al concederles las diversas jerarquías como es educar, instruir y perfeccionar a sus inferiores, previendo las faltas en vez de esperar a que se consumen para castigarlas; así como fomentar entre ellos la fraternidad, el compañerismo y el espíritu de sacrificio que el soldado mexicano tiene latentes y que hay que desarrollar y estimular.

[...]"

ando no c
sufre un

alaciones
servicio. E
requieran
e en asu
e de la de

aria consi
cionales c
el sancion
esto en as
e de la de
posibilidad
e al mill
en posib
aría, sino
tiempo q
esta circu

olicará m
ilitar en c
o privativo



Con la finalidad de justificar esta postura conviene traer a cita los razonamientos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso al resolver la contradicción de tesis 117/2004-SS, cuyo punto de contradicción consistió en determinar si los arrestos por faltas contra la disciplina militar deben regirse por el artículo 13 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 21 del citado Pacto Federal, los cuales resultan ilustrativos para la presente resolución en virtud de que, en ella, el Máximo Tribunal del país concluyó que **el arresto impuesto como correctivo disciplinario, por faltas a la disciplina militar, se rige por lo dispuesto en el artículo 13 constitucional**, que establece:

“Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviere complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al pronunciar sentencia en la contradicción de tesis citada, sostuvo que el precepto fundamental transcrito contiene las siguientes garantías de igualdad:

- a) Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.
- b) Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni puede gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley.
- c) Solo subsiste el “fuero de guerra” para conocer de los delitos y de las faltas contra “la disciplina militar”; por ende,

o y cuan
mplicado
responda

ocupación
ue la de
fecto de
sus prop
, que es
vida de
lo que no
, rápidos
reprimir lo

o de que
as faltas
y sancio
rece señ
República
culo 26 d
, en el q
para con

17/2004-
nte lo sig



os numerat

el fuero de
onocer de
ltad de sa

ahí que, l
es el arre

al, queda
ce el artí
nalizado. I
etende pro



Luego, si se toma en consideración que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que para el arresto impuesto como correctivo por faltas contra la disciplina militar, que se rige por lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, no le es aplicable el límite temporal previsto en el diverso artículo 21 de la Constitución Federal, por la sola razón de que queda comprendido dentro del fuero de guerra, entonces, también es posible sostener que la constitucionalidad del arresto militar debe ser analizado a partir de su especial naturaleza, sin soslayar que no se rige por las normas del fuero civil, sino por aquéllas del fuero militar y, a razón de ello, considerar que el derecho fundamental de audiencia, que exige el artículo 14 constitucional frente al acto privativo, se debe exigir tomando en consideración la finalidad que aquél persigue con su imposición.

Si se toma en consideración que el arresto impuesto por infracciones contra la disciplina militar tiene como finalidad no sólo la sanción del infractor, sino también, en un grado de mayor relevancia, preservar la disciplina, cuyo principio vital es el deber de obediencia, que se considera como uno de los principios que regula la conducta de los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, entonces, es posible considerar **que frente a la imposición de dicho correctivo disciplinario no necesariamente debe regir el derecho fundamental de audiencia previa, por lo que el sancionado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto privativo.**

Lo que se afirma, por una parte, como ya se dijo, atendiendo a que las faltas al orden militar como sus respectivas sanciones quedan comprendidas en el fuero de guerra previsto en el artículo 13 constitucional, y por otra parte, al estudio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado respecto del derecho de

Estudio a partir del cual ha determinado excepciones muy claras, por ejemplo, la materia impositiva y los arrestos decretados como medida de apremio por los órganos jurisdiccionales a efecto de cumplir sus determinaciones, donde el Máximo Tribunal ha priorizado frente a la audiencia previa la finalidad que se persigue con el acto privativo, lo que le ha permitido concluir que, en determinados casos, el derecho de mérito se tutela también cuando la audiencia frente al acto privativo es posterior.

Lo que de ninguna manera implica anular el derecho fundamental de audiencia que la Constitución Federal tutela en favor de todo gobernado, sino que únicamente se justifica que éste se atienda en forma posterior al arresto.

Audiencia posterior que está legalmente prevista en los ordenamientos militares, en los que se establece a favor del militar afectado la posibilidad de acudir en queja ante el inmediato superior de quien le haya inferido el agravio, a fin de cuestionar las disposiciones superiores o las obligaciones que le impone el servicio, frente a la cual se impone al superior jerárquico que

Apoya a todo lo anterior, por mayoría de razón, la jurisprudencia P./J. 24/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente:

Así como la tesis aislada 1a. CXCI/2011 (9a.), sustentada

Tesis: 1a. CXCI/2011 (9a.)



Página: 1085

DISCIPLINA EN EL ÁMBITO MILITAR. SU FUNCIÓN Y ALCANCE CONSTITUCIONAL COMO PRINCIPIO ORGANIZATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. Uno de los elementos definitorios de un ejército es la disciplina militar. Se trata del principio organizativo esencial de los ejércitos que, por su propia naturaleza, trasciende a la esfera interna del individuo y que supone, a su vez, uno de los elementos que necesariamente separa al militar del resto de la sociedad. Sin embargo, la disciplina como principio organizativo y conjunto de reglas ha variado sustancialmente en razón de las necesidades de la defensa y de los principios jurídicos y sociales de cada contexto histórico. En este sentido, la Constitución no queda de ninguna manera ajena a cuestiones relativas a la disciplina y organización interna de las Fuerzas Armadas y conforma también el modelo de Ejército. De conformidad con el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como lo ha establecido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras. En esta lógica, el Ejército, a fin de cumplir con estos fines, requiere una organización jerárquica y eficaz en la que el concepto de disciplina se configura como una exigencia estructural a la misma. Si bien es cierto que la disciplina es un principio organizativo común a todos los sectores de la Administración Pública, en las Fuerzas Armadas goza de una especial importancia ya que permite la cohesión y mantenimiento del orden, indispensables para que el Ejército lleve a cabo su misión constitucional. Es por ello que la disciplina en el ámbito militar debe ser entendida en relación a la naturaleza y función que la Constitución le encomienda a las Fuerzas Armadas, es decir, la eficaz defensa del Estado mexicano. Así, la disciplina, ya sea en su vertiente institucional o como pauta de conducta interna de sus miembros, encuentra su fundamento último en la Constitución. Esto implica, asimismo, que el régimen disciplinario militar no se encuentra ajeno al resto de principios constitucionales, especialmente a las exigencias derivadas de los derechos fundamentales. En definitiva, la disciplina militar, al ser un principio estructural de la adecuada defensa del Estado mexicano, debe ser protegida por el ordenamiento legal y corregida y sancionada, en su caso, a través de las normas penales castrenses, pero siempre, en el entendido de que su carácter instrumental debe ser acorde con las garantías y principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por la conclusión antes alcanzada es innecesario analizar el primer agravio propuesto por el Director General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Bajo tales consideraciones y con fundamento en el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo²⁰, se revoca la sentencia

²⁰ Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

Estudio de los conceptos de violación que no fueron analizados por el juzgador de amparo.

Los argumentos antes expuestos, suplidos en su queja deficiente, son **fundados**.

Isidro Jaramillo Olivares
70.6a,66.20,63.6a,66.00,00.00,00.00,00.00,00.00,00.00,a.0,d
2021-08-27 11:59:18

En ese sentido, cuando se graduó el arresto por un término de quince días, la autoridad responsable, al señalar las circunstancias en que cometió la falta, solo señaló que la infractora habló en tono alterado. No obstante, pasó por alto que la conducta derivó de un tratamiento médico de la hija menor de edad de la peticionaria de amparo. Pero lo más importante,

VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y

extremos depende de la que en ningún momento se ha en consideración y se le que pueda la aceptación, política de este asunto de quejosa que este na, en términos

O INCAPAZ EN TODA SU CAPACIDAD DE JUEZ, POR SU CARÁCTER, una institución y M... es decir, es de violación de los derechos de la persona que pretende de... a el periodo... concederse... ente cuan... afectación... incapaz... de los de... carácter... o, en

MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. *La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no*

dependencia de

fecto al d
fue sanc
as leyes d

esta dep
ña su sol
ectos si
rito no
ente o po
i los térn

terior, at
eciocho,
dvertir qu
de ampa
e orden



Tal situación, por sí sola, implica una trasgresión al derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que el juicio de amparo no puede suspenderse, ni siquiera en los casos de suspensión de derechos humanos, según lo dispone la parte final del artículo 29 constitucional²⁴, lo que se corrobora, además, con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC 8/87, de treinta de enero de mil novecientos ochenta y siete, en el sentido de “... *que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición*”.

En las relatadas circunstancias, se impone conceder el amparo a la quejosa, para el efecto que las autoridades responsables dejen insubsistentes los arrestos impuestos a la quejosa ***** ** ***** ***** ****, los días veintitrés y veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, por quince y noventa y seis horas, respectivamente.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

²⁴ Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, **no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.**

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a

Notifíquese; previo cuaderno de antecedentes que se a, devuélvanse los autos al tribunal colegiado de origen para efectos conducentes y háganse las anotaciones en el libro crónico que al efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en el artículo 188, primer párrafo, de la Ley de Amparo, firman los magistrados, ante la secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADO PRESIDENTE

ENRIQUE CABAÑAS RODRÍGUEZ

MAGISTRADO PONENTE

CARLOS ALFREDO SOTO MORALES

SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO

FRANCISCO EMMANUEL ALEGRIA COLÍN

SECRETARIA DE ACUERDOS

LUZ MARGARITA GONZÁLEZ GÁMEZ

Evidencia Criptográfica – Transacción

Archivo Firmado: 00530000242996540006005.doc

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s):

Firmante	Nombre:	Isidro Jaramillo Olivares	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	706a6620636a660000000000000000000000a0d0	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2019T14:53:07Z / 17/05/2019T09:53:07-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	6a 5e b3 68 a0 d5 8a c2 df 89 79 7c 86 e2 38 6c 20 dc dd 9d ec 92 1c f2 c0 b5 e3 58 a5 6b 51 2c aa 11 9e c2 42 4c 68 b9 be fe 20 f7 3e 8d 7a 10 30 83 07 25 12 45 29 b4 d8 44 42 ad 21 49 37 41 e6 11 ad 32 2b 3a ca d3 47 41 98 27 1b 34 46 f4 67 c9 b6 aa 51 46 7f 3b 88 7d 38 d0 d1 ee 60 f0 85 ab 67 99 06 55 de 1c 90 ae 39 34 48 02 ae aa c6 b7 28 58 d8 06 2e 25 7c d5 0e 9c f3 11 19 28 4f 9b be 40 69 fe 17 e4 30 10 01 62 64 a6 03 9b 3b 40 68 4e 24 9e 04 4f 17 17 5b c6 1f d9 47 d9 80 6b fd 1a 78 d5 b6 32 eb c1 c6 71 9c 52 0c b0 31 c5 48 99 eb c9 09 bb cf 64 9c ae 9e 31 01 17 4a e3 1e 9e f6 17 59 99 d5 38 a9 7a b3 73 3f fc 9a 2c ca f9 b8 bf 49 ad 57 3d a6 07 e3 ac 00 78 7c 2f 44 b5 6b de b8 c2 cf 56 79 5f 30 95 75 84 34 d7 c2 00 29 34 f7 b7 ad 5f 0d c8 e9 9d b4			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	17/05/2019T14:53:07Z / 17/05/2019T09:53:07-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			

Archivo firmado por: Isidro Jaramillo Olivares

Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a0.d0

Fecha de firma: 17/05/2019T14:53:07Z / 17/05/2019T09:53:07-05:00

Certificado vigente de: 2018-08-28 11:59:18 a: 2021-08-27 11:59:18

El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, el licenciado Isidro Jaramillo Olivares, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.